

El espectro del militarismo

El espectro del militarismo acecha de nuevo a nuestro país. Hemos visto a conocidos ex militares de la Tandoná juramentar comisiones de veteranos en cuarteles de la Fuerza Armada, y esto tiene lugar a sabiendas de que el informe de la Comisión de la Verdad recomendaba su inhabilitación para la vida pública por su participación directa en violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Se ha dado el caso de representantes de la Fuerza Armada que han protestado ante el Ministerio de Educación por el tratamiento supuestamente difamatorio dado al Ejército en los apartados de historia de los programas oficiales de Estudios Sociales, a la vez que rinden tributo a la memoria de “héroes” como el general Domingo Monterrosa, responsable de la masacre de El Mozote. Recientemente, el Ministerio de la Defensa Nacional propuso una Ley de Seguridad Nacional que es una reedición de la doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría. Finalmente, en su visita a las tropas salvadoreñas estacionadas en Irak, el presidente Saca posó ante la prensa con atavíos militares. Estos hechos pueden verse como incidentes aislados, y aunque no constituyen evidencia de un giro hacia las doctrinas y métodos dictatoriales del pasado por parte de las fuerzas políticas de derecha, el peligro que representa cualquier grado de revitalización del militarismo en la vida nacional es tan grave que hay que tomarse todos estos síntomas muy en serio. Porque, como nos recuerda el filósofo Jacques Derrida, los espectros no vienen del pasado, sino del futuro: son advertencia de lo que puede ocurrir si no saldamos nuestra deuda de memoria. Y el militarismo es el muerto que la sociedad salvadoreña no ha acabado de enterrar y que quiere resucitar a conveniencia. Los Acuerdos de Paz abrieron la posibilidad de construir una sociedad más justa y democrática, que suponía dismantelar el legado nefasto de setenta años de dictaduras militares y de modos violentos, excluyentes y antidemocráticos de gobernar al país. Si la resurrección del militarismo se sigue contemplando como una salida a los problemas actuales del país es porque nuestra sociedad no ha comprendido el sentido de esta terrible fase de nuestra historia y su incidencia directa sobre nuestros males presentes: violencia, autoritarismo, pobreza, débil imperio de la ley...

La derecha salvadoreña sigue atrapada por un pasado que no es capaz de asumir en todas sus dimensiones, como lo muestran una serie de esfuerzos apologéticos del militarismo y el autoritarismo suscritos por algunas figuras notorias del ámbito cultural nacional. Dentro de estos cabe mencionar la semblanza biográfica de Roberto D'Aubuisson escrita por Geovanni Galeas y publicada por *La Prensa Gráfica* a lo largo de varios domingos durante 2005. Estos artículos pretendían ofrecer una revisión de la historia nacional, donde se limpiaba al líder político de toda responsabilidad de sus gravísimos crímenes — como la organización de escuadrones de la muerte en los primeros años de la guerra y del magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero— y se lo erigía en el artífice preclaro de la democracia de posguerra. Más recientemente se publicaron las memorias póstumas de Waldo Chávez Velasco (*Lo que no conté sobre los presidentes militares*), intelectual orgánico del militarismo durante los regímenes de Fidel Sánchez Hernández y Arturo Armando Molina. Chávez Velasco retrata a esos presidentes como demócratas convencidos y modernizadores visionarios, cuyo destino redentor de la patria se habría visto interrumpido por la incompreensión de sus opositores. La fábula que este singular ejercicio de memoria nos ofrece omite señalar que estos gobiernos, plagados de abusos y corrupción, se sostuvieron gracias a un sofisticado aparato de represión, mentiras y fraudes electorales. Síntoma de las fallas de la memoria nacional es que este libro ha sido recibido positivamente en nuestro medio cultural. Pareciera que la derecha se ha tomado muy en serio la tarea de reescribir la historia reciente del país para la conciencia pública, aunque para ello deba recurrir a grotescas maniobras de falsificación de los hechos. Por fortuna, también han visto la luz en la escena cultural nacional trabajos de investigación histórica académica, rigurosos y originales, como los libros de Patricia Alvarenga (*Ética y cultura de la violencia*) y de Patricia Parkman (*Revolución no violenta en El Salvador*). Ellos nos entregan mejores perspectivas sobre el sentido del militarismo y nuestra vida nacional reciente para una memoria histórica crítica y comprometida con el cambio social.

El militarismo no nace, como ha sido usual decir, a partir del golpe de Estado con que Maximiliano Hernández Martínez derrocó, en 1931, al ingeniero Arturo Araujo, presidente constitucional, electo en los primeros sufragios libres de nuestra historia. El recurso a la fuerza militar contra la población fue una constante en el proceso de modernización del país, que se pone en marcha en el último tercio del siglo XIX. Así lo comprendió Rafael Zaldívar, quien detentó la presidencia del país entre los años 1876 y 1885. Durante su despótico régimen, se comenzaron a invertir los crecientes ingresos del fisco —resultantes del auge cafetalero— en la formación de un ejército profesional y estable. Hasta entonces éste había consistido básicamente en un limitado cuerpo de oficiales y un considerable número de hombres fuertes y de estructuras informales de milicias, las cuales se movilizaban en momentos de emergencia y como resultado de complejos procesos de negociación con poderes locales. Curiosamente, las comunidades indígenas, famosas por su cohesión y beligerancia, lograban obtener ventajas del poder central aportando milicias aguerridas, como la de los indígenas de Cojutepeque. Pero los impulsores de las reformas liberales, que incluían entre otras la extinción de la base de tenencia legal de la tierra de comunidades indígenas y municipalidades, veían con mucho recelo este poder de la localidad sobre el centro.

La formación del ejército profesional se da, pues, en un proceso que aglutina la fuerza en el Estado, con el fin de concentrar las riquezas en círculos reducidos, que se autoproclamaban civilizados y abanderados de la modernidad, y despojaban a las grandes mayorías, descalificadas como bárbaras y atrasadas, de la base de su sustento material para convertirlas en fuerza de trabajo barata y abundante. Al dedicar el Estado una parte sustancial de los dineros públicos a la formación de un cuerpo profesional de represión y vigilancia, y no a mejorar las condiciones materiales y culturales de la población, se mostraba el verdadero rostro excluyente y violento del proyecto de modernización del país, avanzada de la civilización mundial del capital, que se nutría destruyendo a las otras lógicas sociales y culturales que se le interponían. Por ello, algunos pensadores, como Walter Mignolo o Enrique Dussel, consideran que la modernización de América Latina es la continuación y profundización del proyecto colonial.

El carácter disciplinado y vertical del ejército nacional, que toma sus modelos de organización del ejército prusiano, a través del ejemplo del ejército chileno, se convierte en la manifestación por antonomasia de la institución moderna. El director de la Escuela Politécnica (el equivalente de entonces a la actual Escuela Militar), el capitán chileno Juan Bennett, publica a partir de 1903 una serie de artículos en *La Quincena*, prestigiosa revista literaria nacional. Promueve en ellos el carácter ejemplar del Ejército para el país como modelo de disciplina y eficiencia. Se perfila ya desde entonces lo que será el fundamento doctrinario del militarismo: la idea de que para avanzar en la modernización la sociedad entera debe organizarse siguiendo el modelo de la institución militar.

La popularidad del Ejército entre los grupos privilegiados es de esperarse: desarrolla mecanismos eficientes para contener el descontento de las mayorías desposeídas sin que esto les represente mayores costos. Pero el Ejército proporciona una ventaja adicional al constituirse en un sistema de cooptación eficiente y barato de los sectores populares. El aura de prestigio que emana de la pertenencia a una institución fuerte y cerrada, y la posibilidad de progreso social a través de una ética de obediencia ciega y de veneración a la autoridad se vuelven una alternativa para sectores de la población cada vez más desarticulados de sus vínculos comunitarios tradicionales y sin otras opciones de mejora material. Es así como el Ejército logra construir también una base social leal para quienes detentaban el poder. De esta manera se explica, al menos en parte, las raíces hondamente afincadas del militarismo en el imaginario nacional. Esto se percibe todavía en manifestaciones aparentemente inocentes, como la imaginería marcial de las celebraciones de la independencia del 15 de septiembre. El ritual del desfile y sus componentes, por mucho que se maquillen bajo eufemismos ridículos como “bandas de paz”, siguen siendo indicadores de cuánto nos cuesta imaginarnos al país bajo modelos que no sean guerreros.

Las dictaduras militares fueron una respuesta a la negativa del poder a atender las demandas sociales mayoritarias y a la incapacidad de repensar un proyecto de nación que no fuera la imposición por la fuerza de los intereses de minorías prepotentes al resto de la colectividad.

Mucho antes de la dictadura militar de Hernández Martínez, el ejército salvadoreño se había convertido en una sólida y eficiente maquinaria de coerción y terror, indispensable para el funcionamiento de una sociedad con desigualdades descomunales y con mecanismos de diálogo y construcción de consenso exiguos y frágiles. Esto tendría un precio. Al convertirse la amenaza y la fuerza efectiva en los principales mecanismos para dirimir conflictos de toda índole, la sociedad se fue volviendo más violenta. Esta violencia afectaba principalmente a los más débiles, pero tampoco dejaba incólumes a los poderosos, que vivían rodeados de armas y de ejércitos privados. A esto habría que añadir que la total impunidad de que gozaba el aparato represivo permitió a algunos de sus miembros prosperar a base de infringir la ley. Aquellos que hoy añoran la “paz militar” olvidan o prefieren ignorar que ésta fue precaria e ilusoria. Supuso dosis de violencia y de terror que, por muy naturalizadas o disfrazadas que estuvieran, eran del todo inaceptables para cualquier sociedad que se precie de civilizada. Olvidan también que siempre existió descontento y resistencia por parte de sectores importantes del país, y que las conquistas democráticas de los últimos años no han sido dádiva de los poderosos, sino resultado de luchas populares que han supuesto cuotas inmensas de sacrificio y sufrimiento al país.

Las dictaduras militares fueron una respuesta a la negativa del poder a atender las demandas sociales mayoritarias y a la incapacidad de repensar un proyecto de nación que no fuera la imposición por la fuerza de los intereses de minorías prepotentes al resto de la colectividad. El atroz genocidio de 1932, dirigido contra los pueblos indígenas del occidente del país —suceso que el partido oficial todavía celebra sin empachos como su gesta heroica—, marca el inicio del accionar de un poder político reconstituido por el militarismo que tiene por divisa el silenciamiento o el exterminio del rival. Adelantándose por varias décadas a la Guerra Fría y a la cacería de brujas de McCarthy en Estados Unidos, los militares salvadoreños se inventaron un enemigo mítico: el comunismo. La palabra “comunista” se convirtió en una eficaz etiqueta que podían colgar a cualquier expresión de inconformidad o disidencia frente al proyecto autoritario de modernización, y condenarla al silencio, al ostracismo o a la persecución.

Patricia Parkman nos explica la forma aberrante mediante la cual se realizó la consolidación del Estado moderno durante el régimen de Hernández Martínez: la extensión del modelo de gestión vertical y autoritaria de la institución militar a otros ámbitos de la vida nacional, como las instituciones públicas o educativas. El Salvador se fue transformando en una sociedad militarizada como respuesta a la incapacidad o falta de voluntad de los sectores de poder para atender las necesidades de la población, incluso de aquellos sectores medios a los que habría logrado integrar como subalternos.

Las detenciones ilegales y las torturas fueron mecanismos que el militarismo empleó para lidiar con sus enemigos aun en tiempos de militares “progresistas”, como el coronel Óscar Osorio. El testimonio *Secuestro y capucha* del entonces líder del clandestino Partido Comunista Salvadoreño, Salvador Cayetano Carpio, sigue siendo un documento espantoso del profesionalismo y la frialdad con la que el aparato militar ocupaba técnicas de tortura contra los “enemigos del Estado” durante esos años de aparen-

te apertura. A medida que los grupos de poder desperdiciaban una y otra vez las oportunidades de apertura democrática y arrinconaban al país en un callejón político sin salida, crecieron los recursos dedicados a la sistemática y deliberada violación de los derechos humanos de los salvadoreños.

De este aparato represivo, que dentro del Estado se dedicaba a quebrantar la legalidad más básica, proviene por cierto el mayor Roberto D'Aubuisson, quien fuera director del aparato de inteligencia de la Guardia Nacional durante los últimos años del gobierno del general Romero. La Guardia Nacional tuvo una historia particularmente siniestra. Fundada durante el mandato de Manuel Enrique Araujo (1912-1913), bajo el modelo de la Guardia Civil Española, mostró desde sus comienzos una vocación especial para aterrorizar a los campesinos y una singular maestría en la práctica de la tortura. En los archivos judiciales que corresponden a sus primeros años de funcionamiento, ya hay denuncias donde se describen métodos como colgar a los detenidos de los pulgares durante horas para lograr confesiones. Pero el crecimiento y profesionalización del aparato de represión y terrorismo de Estado fue posible, al menos en una parte sustancial, gracias al financiamiento y entrenamiento del gobierno norteamericano durante la Guerra Fría. Fue ésta una de las grandes aberraciones del mundo moderno y civilizado: gobiernos democráticos de países ricos se dedicaron a entrenar y financiar a los verdugos de los países pobres.

Lo demás es historia demasiado conocida. Durante el conflicto bélico que desangró a El Salvador durante las décadas de 1970 y 1980, las Fuerzas Armadas fueron las principales responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hechos tan terribles como el exterminio de una aldea en El Mozote o el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, fueron planificados y ejecutados con sangre fría por altos mandos del ejército nacional. La Comisión de la Verdad ha señalado muy claramente la responsabilidad de estos hechos, y ésta alcanza a muchos de los que hoy andan protestando por el honor herido de la Fuerza Armada.

Resulta escandaloso que se deba insistir en la veracidad de hechos terribles y abundantemente documentados. Pero es necesario hacerlo por un acto de justicia elemental con aquellos que sufrieron en carne propia estas atrocidades, y en especial para saldar una deuda moral con quienes dieron su vida luchando por abrir un espacio de esperanza para una sociedad más justa. Porque nunca logró el militarismo doblegar por completo la dignidad de la población. En nuestra historia también abundan ejemplos de esfuerzos por romper con este imaginario de terror y sumisión, como es el caso de las comunidades campesinas inspiradas por el movimiento de la Iglesia Popular, a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por eso, que haya sectores de nuestra sociedad que con obstinación e insensibilidad pugnen por ocultar y negar esta verdad histórica no sólo es una afrenta a las víctimas, sino también una grave amenaza para el futuro del país, pues quienes se niegan

Saldar la deuda pendiente con nuestra historia, un pasado de horror que no hemos sido capaces de dejar atrás, es la tarea que nos compete a todos los salvadoreños.

La sociedad debe asumir la necesidad de reparación de quienes todavía sufren los efectos de los despojos y expoliaciones que supuso la construcción de El Salvador moderno.

a reconocer sus faltas están dispuestos a repetirlos. A quien no le duelan ni le indignen los niños masacrados en El Mozote o la cruel incertidumbre que todavía sufren las familias de los desaparecidos, es porque está dispuesto a cometer esos hechos o a convivir con ellos.

Por la misma razón, resulta del todo inaceptable que haya sectores dentro del Ejército que defiendan como punto de honor ese pasado infamante. Si las Fuerzas Armadas han de tener algún lugar en un El Salvador justo y democrático, tienen que romper decidida y expresamente con el legado nefasto que les antecede. Pero no sólo al Ejército sino también al Estado, a través de una pública declaración del Presidente de la República, le toca asumir responsabilidad histórica de esos crímenes frente a la sociedad toda, comprometerse a no repetirlos y trabajar activamente en la reparación de las víctimas. Sólo así puede comenzar a saldarse la deuda de la memoria. Porque la memoria no debe ser únicamente conmemorativa; ha de tener un componente práctico de reparación efectiva de los agravios pasados para dar paso a una verdadera reconciliación, donde los que fueron enemigos se reconozcan en su dignidad humana y en su derecho mutuo a convivir en un mismo país.

Para concluir, es importante subrayar que saldar la deuda pendiente con esta historia, un pasado de horror que no hemos sido capaces de dejar atrás, es tarea que nos compete a todos los salvadoreños. La sociedad en su conjunto debe asumir la necesidad de reparación de quienes todavía sufren los efectos de los despojos y expoliaciones que supuso la construcción de El Salvador moderno; entre estos, de manera muy destacada, se encuentran los sobrevivientes de las comunidades indígenas que siguen viviendo en medio de la miseria, la invisibilidad y el desprecio. Es importante para lograr esta meta pensar nuestro futuro sin caer en las trampas del vocabulario de la modernidad liberal o neoliberal que nos mantiene condenados a repetir los pecados del pasado. Y queda pendiente, finalmente, la colosal tarea educativa que nos permita superar una serie de hábitos, rituales y mitos firmemente arraigados entre nosotros, que con asombrosa ligereza nos llevan a sentir nostalgia por los verdugos.

San Salvador, 26 de junio de 2007.